



Informe 0176/2009

La consulta plantea si resulta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la comunicación a las organizaciones sindicales integrantes de la Mesa de Negociación y grupo de Consejeros en la oposición, de datos personales y profesionales de los funcionarios que prestan servicios en el Consell de Mallorca, comunicación que alcanzaría al nombre y apellidos, código del trabajador, categoría y forma de ocupación del puesto incluidos en la relación nominativa de puestos de trabajo.

I

La consulta hace referencia a las peticiones de los datos señalados formuladas por algún sindicato integrante de la Mesa de Negociación por una parte y, por otra, por el Grupo de Consejeros de la oposición del Gobierno de Mallorca.

En respuesta a esta cuestión, debe indicarse que la publicidad de los datos constituirá una cesión de los mismos, al definir el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

En ese caso, tal y como determina el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. Esta regla de consentimiento sólo se verá exceptuada en los supuestos contemplados en el artículo 11.2, entre los que cabe destacar aquellos casos en que una norma con rango de Ley dé cobertura a la cesión.

Respecto de la primera cesión de los datos contenidos en ficheros públicos, y dado que la consulta se refiere esencialmente a la puesta de los datos en conocimiento los representantes de las centrales sindicales presentes en la Mesa de negociación, resulta aplicable al supuesto lo previsto en el artículo 21.3 de la Ley Orgánica 15/1999, en virtud del cual “no obstante lo establecido en el artículo 11.2 b), la comunicación de datos recogidos de fuentes accesibles al público no podrá efectuarse a ficheros de titularidad privada, sino con el consentimiento del interesado o cuando una Ley prevea



otra cosa". En consecuencia, dado que entendemos que no existe un previo consentimiento a la cesión, ésta será únicamente posible en los supuestos en que así lo prevean las normas con rango de ley que regulan el régimen del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

En la materia que nos ocupa, debe considerarse, por el ámbito subjetivo al que afectan los datos, los funcionarios de una Administración Pública, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Los datos que, conforme a dicha norma legal pueden comunicarse sin consentimiento del afectado son los que integren los extremos referidos en dicha norma, sin que se pueda extender, en principio, y sin dicho consentimiento, a otros que no estén expresamente previstos por la misma, o por otra de igual rango.

II

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 39.1 establece que "los órganos de representación de los funcionarios son los Delegados de Personal y las Juntas de Personal", según proceda. Por otro lado, en el artículo 40 enumera, las funciones atribuidas a las Juntas de Personal y a los Delegados de Personal, incluyéndose entre las mismas, no sólo la recepción de información, sino también "vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, seguridad social y empleo, y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes" (artículo 40.1.e.).

Por su parte, el artículo 15.3 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, establece el carácter público de las Relaciones de Puestos de Trabajo, si bien las mismas, no contendrán, a la vista del contenido exigido por el artículo 15.1 b), los datos del personal concreto que ocupe un determinado puesto de trabajo, sino exclusivamente las características de cada uno de los puestos de trabajo existentes en cada Dependencia Administrativa, siendo los datos personales referidos a cada funcionario público, de acceso restringido a éste último, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.5, párrafo segundo de la propia Ley 30/1984.

Se hace preciso, en consecuencia, cohonestar las atribuciones conferidas a los Delegados de Personal o a las Juntas de Personal en la Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto Básico del Empleado Público con la protección otorgada a los datos de carácter personal, regulada en la Ley Orgánica 15/1999, para la posible cesión de esos datos.

Pues bien, a nuestro juicio, la función de vigilancia y protección de las condiciones de trabajo, atribuida a las Juntas de Personal por la Ley 7/2007



puede llevarse a adecuado desarrollo sin necesidad de proceder a una cesión masiva de los datos referentes al personal que presta sus servicios en el Órgano o Dependencia correspondiente. Sólo en el supuesto en que la vigilancia o control se refieran a un sujeto concreto, que haya planteado la correspondiente queja ante la Junta de Personal, será posible la cesión del dato específico de dicha persona.

En los demás supuestos, la función de control quedará plenamente satisfecha, a nuestro juicio, mediante la cesión a la Junta de Personal de información debidamente disociada, según el procedimiento definido en el artículo 3 f) de la Ley Orgánica 15/1999, que permita a aquélla conocer las circunstancias cuya vigilancia le ha sido encomendada sin referenciar la información en un sujeto concreto.

En consecuencia, procederá, en caso de haber sido formalmente solicitada, la cesión de los datos solicitados, siempre que los mismos sean cedidos de forma disociada, sin poder referenciar los datos a personas identificadas o identificables. En caso contrario, deberá recabarse el consentimiento de los interesados, conforme exigen los artículos 11 y 21 de la Ley Orgánica 15/1999.

II

En particular, y en relación con el acceso por la Junta de Personal a los datos referidos a la percepción del complemento de productividad, debe tenerse especialmente en cuenta lo indicado en el informe de esta Agencia de 27 de mayo de 2009, en que se señalaba lo siguiente:

“La cuestión, referente a la vigencia del mencionado artículo 23.3 c) de la Ley 30/1984 como habilitante de la revelación a los representantes sindicales de los datos individualizados correspondientes al complemento de productividad de los empleados públicos ha sido examinada con detenimiento por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado en Dictamen de 26 de enero de 2009, en el que se indica, en primer lugar, lo siguiente:

“(…) en una primera aproximación al Capítulo IV del Título III del EBEP (relativo al derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional y al derecho de reunión), Capítulo que, como se ha visto, es directamente aplicable, más concretamente, a su artículo 40 (referente a las “Funciones y legitimación de los órganos de representación”), se observa, tras una lectura atenta del mismo, que, a diferencia de su antecedente legislativo más próximo (el artículo 9 de la derogada Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas), dicho precepto



no atribuye a las Juntas de Personal y Delegados de Personal, en su caso, la función específica consistente en tener conocimiento de las cantidades que percibe cada funcionario en concepto de complemento de productividad.

En efecto, una simple comparación de las funciones encomendadas a esos órganos de representación en los artículos citados pone de manifiesto la clara voluntad del legislador de mantener las funciones que el artículo 9 de la Ley 9/1987 atribuía a los mismos, salvo la de tener conocimiento de las cantidades que perciba cada funcionario en concepto de complemento de productividad, que se sustituye en el artículo 40 del EBEP por otras muy genéricas, como la prevista en el apartado 1.a) de este precepto –“recibir información sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones...”– o la prevista en el apartado 1.f) –“colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad”-.

Es clara, por tanto, la incompatibilidad, en este punto, entre la regulación contenida en el artículo 9 de la Ley 9/1987, derogada (y que venía a concretar la previsión contenida en el último párrafo, último inciso, del artículo 23.3.c) de la Ley 30/1984) y la contenida en el artículo 40 del vigente EBEP, precepto integrante del Capítulo IV del Título III de este último texto legal y, por tanto, de directa aplicación, como establece la Instrucción primera de la Resolución de 21 de junio de 2007.

Llevada a cabo la constatación que acaba de indicarse, el Dictamen analiza la vigencia del tercer párrafo del artículo 23.3 c) de la Ley 30/1984, similar al artículo 82.3 c) de la Ley 2/1987 ahora analizada, teniendo en consideración lo establecido en la disposición derogatoria y la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, llegando a la conclusión que la incompatibilidad detectada entre los artículos 40 del Estatuto Básico del Empleado Público y 9 de la Ley 9/1987 en lo referente al acceso por los órganos de representación de los trabajadores de los datos individualizados correspondientes al complemento de productividad conduce a considerar derogada por la Ley 7/2007 la Ley que hasta su entrada en vigor legitimaba la mencionada cesión de datos. Así, el tan citado Dictamen razona lo siguiente:

“Aunque para la Administración General del Estado sigue siendo aplicable, hasta la entrada en vigor de la Ley de Función Pública de dicha Administración, el artículo 23 de la Ley 30/1984, existe un límite a



tal aplicación, cual es, como se ha dicho, el de la incompatibilidad de la regulación contenida en dicho precepto con lo establecido en el EBEP.

En el presente caso, y por lo que se refiere a la cuestión sometida a informe de este Centro, relativa al conocimiento por parte de los representantes sindicales de las cantidades percibidas por cada funcionario en concepto de complemento de productividad, previsto en el artículo 23.3.c), último párrafo, de la Ley 30/1984, se advierte enseguida que esta última previsión entra en clara contradicción con lo dispuesto en el artículo 40 del EBEP, integrante del Capítulo IV, Título III de este texto legal que, como se ha visto, es directamente aplicable, por lo que la citada previsión contenida en el artículo 23.3.c), último párrafo, de la Ley 30/1984 debe entenderse derogada por el artículo 40 del EBEP, y ello sin perjuicio de que subsistan las restantes previsiones del artículo 23.3 de la Ley 30/1984 sobre retribuciones complementarias (dado que respecto de estas últimas previsiones no se contiene en el EBEP ninguna norma que sea incompatible con ellas).

En definitiva, y de acuerdo con lo establecido en las disposiciones derogatoria única y final cuarta del EBEP y en la Instrucción primera de la Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, el último inciso del artículo 23.3.c) de la Ley 30/1984, de Medidas de Reforma de la Función Pública, que se concretaba en el artículo 9.4.c) de la Ley 9/1987, debe entenderse derogado por el artículo 40 del EBEP, de cuyo tenor literal se induce que ha desaparecido la función atribuida por la anterior normativa a los representantes sindicales de los empleados públicos, consistente en tener conocimiento y ser oídos sobre las cantidades que percibe cada funcionario por complemento de productividad.

III

En cuanto a las solicitudes de los mismos datos de los funcionarios efectuadas por un Grupo de Consejeros, la misma podría tener su fundamento en la necesidad de que los Consejeros solicitantes estén debidamente informados, a fin de llevar a cabo su función de control y fiscalización de los órganos de gobierno del Consell de Mallorca. Es preciso acudir a la Ley que regula sus competencias para determinar si la misma puede erigirse en ley habilitante de la cesión o acceso a los datos en cumplimiento de lo señalado por el artículo 11.1 a) de la LOPD.

La Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero de Reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, aprobado por la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero regula la institución del Pleno del Consell estableciendo en su número 1

que “El pleno del Consejo Insular ejerce la función legislativa ante el Parlamento de las Illes Balears, la función normativa, aprueba los presupuestos del Consejo Insular, controla la acción de gobierno del Consejo Ejecutivo (....).”

En su número 3 señala que “El Reglamento Orgánico del Consejo Insular establecerá la formación de los grupos políticos, la participación de éstos en el proceso de elaboración de la normativa, la función de la Junta de Portavoces y las demás cuestiones necesarias para el buen funcionamiento de la institución.”

Por su parte en su número 4 dice que “Los Consejeros del Consejo Insular tendrán acceso a toda la información generada por la institución y gozarán de las prerrogativas que el Reglamento Orgánico del Consejo Insular establezca.”

En su número 5 añade que “El Pleno ejercerá el control y la fiscalización de la acción del Presidente y del Consejo Ejecutivo mediante la moción de censura al Presidente, la votación sobre la cuestión de confianza que éste plantee y los debates, las preguntas, las interpelaciones y las mociones sobre su actuación y otras que se establezcan.”

Ya de las citadas normas se desprende que, en cuanto los Consejeros de la oposición que cita la consulta forman parte del Pleno del Consejo Insular, podrían solicitar la información a que la consulta se refiere, en su función de control del Consejo Ejecutivo.

Además, el artículo 68 del Estatuto Balear se refiere al funcionamiento y régimen jurídico de la actuación de los Consejos Insulares y de sus órganos, así como al régimen de sus funciones y competencias remitiendo el mismo a la Ley de Consejos Insulares. La Ley 8/2000, de 27 de octubre, de Consejos Insulares de nuevo señala en su artículo 16.1 que “El Pleno del Consejo ejercerá el control y fiscalización del Presidente, Comisión de Gobierno y Consejo Ejecutivo a través de los siguiente medios:

- a) (.....)
- b) Ejercer el control y la fiscalización de los órganos de gobierno a través de debates, preguntas y mociones sobre su actuación y otros que se establezcan.
- p) Aprobar su plantilla de personal, su relación de puestos de trabajo y la fijación de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los empleados públicos.”

Por último cabe añadir que el artículo 18 de esta Ley de Consejos Insulares contempla otro instrumento de control que son “las preguntas”, señalando al respecto que “Los grupos políticos del Consejo podrán formular preguntas sobre temas concretos al Presidente, Vicepresidente/s, a la

Comisión de Gobierno, al Consejo Ejecutivo o a alguno de sus miembros. Las preguntas deberán presentarse por escrito, con indicación de si se solicita una respuesta oral ante el Pleno o una respuesta escrita.”

La conclusión de cuanto antecede y dado que las leyes atribuyen a los Consejeros (incluidos los de la oposición) la posibilidad de acceder toda la información que genere el Consell, los mismos podrán consultar toda la documentación referida al mismo, en el ejercicio de su actividad de control de los Organos de la Institución, amparándose esta cesión de datos en que consistiría la consulta, en los artículos 11.2 a) y 21.1 de la LOPD.

Por último ha de recordarse que los cesionarios sólo podrán utilizar los datos en el ámbito de sus competencias de control y vigilancia, toda vez que éste es el límite establecido y permitido por la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de Consejos Insulares y en la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero de Reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, indicando a su vez el artículo 4.2 de la LOPD que “los datos no podrán utilizarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”, sin que sea posible que los Consejeros de la oposición den ningún tipo de publicidad a los datos obtenidos ni los cedan a un tercero.

Todo ello en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal,